

EL ITINERARIO DE LA DEMOCRATIZACION

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION POPULAR*

ELIZABETH JELIN

(CEDES, Argentina)

El diez de diciembre de 1983 asumió la presidencia de la Argentina Raúl Alfonsín, electo democráticamente después de casi ocho años de la más sangrienta dictadura militar. El proceso electoral había sido rápido: desde el momento en que se comenzó a vislumbrar la perspectiva electoral, después de la derrota de las Malvinas, la reemergencia de los partidos políticos se aceleró enormemente. En pocos meses se dieron todos los pasos: reconocimiento legal de los partidos políticos, afiliación de masas en una magnitud desconocida en la historia del país, elecciones internas y procesos de selección de candidatos partidarios a los puestos de gobierno, la campaña electoral, para culminar el 31 de octubre de 1983 en elecciones limpias y pacíficas, donde nadie pudo denunciar actos de ilegalidad o violencia.

Ese fue, sin duda, el tiempo de los partidos. Poca otra actividad pública y política podía esperarse en la sociedad argentina, cuyas energías estaban concentradas en ese proceso político que apareció en la superficie del país y penetró la trama social con una rapidez e intensidad inigualada. Recuérdese que en pocos meses se afiliaron 3.300.000 personas al Partido Justicialista, y casi un millón y medio al Partido Radical. De hecho, incluyendo todas las afiliaciones, casi el cuarenta por ciento de los inscritos en el padrón electoral estaba afiliado a algún partido político en el momento de las elecciones.

Todo esto salía aparentemente de la nada, de la ausencia de los partidos políticos, obligada por la dictadura, sin duda, pero también producto de la descomposición interna y la crisis. La ola político-partidista cubrió la escena, dejando poco espacio para todas las otras manifestaciones colectivas de la sociedad, que habían estado presentes en el espacio público durante los dos años anteriores.

Una vez inaugurado el gobierno democrático, la puesta en marcha del sistema institucional se constituyó en el desafío fundamental. Existía una normatividad legal, se hacía necesario ponerla en funcionamiento; en muchas áreas, se requería reformularla profundamente. Además, no existía una acumulación de saberes prácticos sobre cómo operar dentro de esa normatividad, al haber estado interrumpida su vigencia durante tantos años. Hay que aprender a ser secretario, diputado o concejal. Hay que aprender, por ejemplo, a ser periodista parlamentario.

En este contexto de reconstitución y construcción de una institucionalidad democrática, los movimientos sociales pueden asumir distintos papeles, en función de las diferentes definiciones y proyectos de democracia. El debate sobre el alcance de la democracia que se quiere y la que se puede construir está siempre presente. La relación entre democracia política y democracia social no es sólo tema de elaboración académica de las ciencias sociales. También constituye el núcleo del debate socio-político en períodos de transición.

* Este artículo fue redactado antes de la sublevación militar de abril de 1987 y de la discusión parlamentaria de la "ley de obediencia debida" en mayo de 1987. Estos acontecimientos, y su impacto sobre los movimientos sociales, son discutidos en un epílogo.

En un sentido, elegir estudiar los movimientos sociales implica una opción teórica y, en este caso, también un compromiso ideológico. Opción teórica en cuanto supone privilegiar las dimensiones sociales y culturales en el análisis de los procesos de democratización. Compromiso ideológico en cuanto a la búsqueda de mecanismos de participación y de presencia socio-política de los sectores sociales subalternos. Es por eso que nos preguntamos aquí sobre la institucionalidad política democrática desde la perspectiva de los intereses, demandas y sistemas de representaciones de los sectores sociales subordinados.

En la situación argentina de la transición, la valoración de la institucionalización democrática es compartida por amplios sectores de la sociedad y de la vida política. Las divergencias surgen frente a cómo hacerlo. De manera extrema, se puede pensar en dar prioridad a la "restauración", o sea, a la puesta en práctica de los mecanismos democrático-representativos preexistentes, con la idea de que las reformas se irán haciendo en una segunda etapa, a partir de lo que se va poniendo en funcionamiento. Pero lo existente, de lo cual hay que partir, es por lo menos de dos tipos: legislación suspendida durante los regímenes militares y legislación positiva implementada durante el régimen militar, por decretos. ¿Derogar automáticamente esta última? ¿Restaurar en bloque lo anterior? La sociedad ha cambiado, hay nuevas cuestiones que requieren soluciones imposibles de ser encontradas en esos cuerpos legales. Pensemos, para no ir más lejos, en el tema de los derechos humanos y la ley de amnistía autoimpuesta por los militares. En ese campo, como en muchos otros, no hay verdaderas salidas "restauradoras". Las soluciones deben ser necesariamente novedosas. Al restaurar algo, se lo transforma o resignifica. ¿Cuánto transformar? Para algunos, lo menos posible. Todo el que pide más pide demasiado y corre el riesgo de "desestabilizar" a la frágil democracia. Para otros, la manera de democratizar el sistema político pasa por transformaciones más profundas, que no pueden esperar un segundo tiempo después de la "restauración". Las demandas de los movimientos sociales están más a menudo en este segundo grupo, y de ahí la acusación frecuentemente escuchada de que son "desestabilizadores".

Es en este espacio de encuentro entre los movimientos sociales y las expresiones colectivas de los sectores populares, por un lado, y los procesos de democratización del Estado y del sistema político en la Argentina, por el otro, que se sitúa el análisis que realizamos en este artículo, que centra su atención en lo ocurrido durante los años finales de la dictadura y los primeros tres años de retorno a la democracia.

LOS DERECHOS HUMANOS

Quizás el caso más claro de un movimiento social en formación durante los años de la dictadura es el movimiento por los derechos humanos. Existían en la Argentina algunas organizaciones especializadas en esta temática desde antes: la *Liga Argentina por los Derechos Humanos* fue fundada en 1937, respondiendo a la línea política del Partido Comunista; la *Asamblea Permanente por los Derechos Humanos* se fundó a fines de 1975, con carácter multi-partidario; el *Servicio de Paz y Justicia* trabaja en la Argentina desde 1974, con la coordinación general para América Latina de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980; el *Movimiento Ecueménico por los Derechos Humanos* se conformó en febrero de 1976, con la participación de religiosos y laicos de diversos cultos.

Frente a la represión desatada más abiertamente a partir del golpe militar de marzo de 1976, surgió una movilización defensiva y reactiva, en la medida en que se iban cometiendo las violaciones. *Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres*

de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, se constituyeron entre 1976 y 1977, con los familiares de los afectados. Las primeras acciones partieron de las relaciones directas de parentesco, de personas que averiguaban y buscaban a sus familiares. De este vínculo primario y familístico, en la medida en que se reconocen (inclusive literalmente, al volver a ver las mismas caras en los diversos despachos de funcionarios), es que comienzan la solidaridad y la acción colectiva.

El contraste entre una madre o un familiar preguntando por la suerte de su hijo o hermano y el clamor internacional por los derechos humanos en la Argentina es enorme. No hay nada más privado que la experiencia de ser madre; nada más público que el Papa hablando desde los balcones del Vaticano o las presentaciones en cortes de justicia internacionales. Lo público y lo privado se confunden —o se funden— en el límite de la vida.

Internamente, el movimiento de derechos humanos era heterogéneo. Sobre la base de los compromisos familiares, se fueron agregando otros actores, otros personajes, que se acercaban desde distintos orígenes y con diversas identidades: desde el humanismo cristiano, simbolizado en el Premio Nobel de la Paz otorgado a Pérez Esquivel; desde los liderazgos políticos de los partidos democráticos; desde la intelectualidad comprometida; desde la población en general. Con este reclutamiento de orígenes heterogéneos, con grados y tipos de compromiso variados, con propuestas ideológicas y experiencias vitales tan dispares, se puede encontrar un núcleo mínimo de unidad, dado por la definición del opositor-enemigo y simbolizado en alguna consigna unificadora en cada momento. “*Aparición con vida y castigo a los culpables*” fue la consigna aglutinadora durante el período de auge del movimiento.

Estos años de acciones colectivas muestran cómo, a partir del ataque frontal a los derechos más elementales —básicamente la vida— se puede generar un movimiento que, aunque heterogéneo socialmente y en cuanto a demandas y consignas, introduce una dimensión nueva en el debate político: la consideración ética, que apela a valores fundamentales. La vida, la verdad, la justicia, planteando una exigencia ética de fundamentos humanitarios, se convierten en proyecto: “*Los derechos humanos ya no son sólo aquello que está antes y hay que respetar, sino aquello que está después y hay que construir. Se presentan como horizonte, como utopía*”. (Sonderguer, 1986, p. 11).

Hasta 1979, el gobierno contaba con el silencio de los partidos políticos, los sindicatos y la cúpula de la Iglesia. Con la visita de la *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, organismo de la OEA, en setiembre de 1979, y el Premio Nobel de 1980, se abrió un mayor espacio de difusión. Los derechos humanos se constituyeron en tema de debate público.

Durante el transcurso de 1981 el tema fue paulatinamente asumido por las diversas fuerzas políticas y sociales. En los inicios de 1982, frente al “*las Malvinas son argentinas*”, la respuesta del movimiento fue “*los desaparecidos también*”. Ya en 1983, el movimiento de derechos humanos logró aglutinar bajo sus banderas a fuerzas sociales y políticas, ocupando un lugar en la definición de las condiciones de la transición a la democracia.

La transición a la democracia significó un desafío importante para este movimiento. La consigna “*somos la vida*” de la campaña electoral del Partido Radical no fue una consigna ajena al movimiento. La elección de Alfonsín, vicepresidente de la *Asamblea Permanente de Derechos Humanos*, implicaba que el nuevo régimen se inauguraba aceptando y haciendo suyos los principios ideológicos rectores del movimiento en lo referente a los fundamentos éticos del Estado. El Estado tomó una parte del conjunto de principios y demandas, pero no todas ni de manera cabal. Hubo redefiniciones estatales basadas en consideraciones políticas pragmáticas, en la necesidad de la negociación y el compromiso. El movimiento de derechos humanos se fue ubicando entonces fuera del Estado, cuestio-

nando y reclamando por la tibieza de las decisiones estatales, exigiendo más, tanto en lo que hace a la administración de la justicia frente a los militares como en el proceso de esclarecimiento de las desapariciones y la libertad a presos políticos.

En el aparato del Estado, se requería resolver o canalizar de alguna manera la problemática de los militares. Esa era una condición de estabilidad del régimen. En esta área, no se podía simplemente volver a la legalidad anterior, "restaurar". Se requería derogar toda la legislación introducida por la dictadura y encontrar alguna manera de juzgar a los militares. En este campo, el gobierno tomó la iniciativa, con algunas propuestas importantes: la reforma al Código de Justicia Militar, el decreto de juicios sumarios y la creación de la CONADEP (*Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas*). La actitud general con que el Estado entraba en el tema se hizo clara: proponiendo transformaciones graduales, cautas, con cierta timidez, basada en los temores de "desestabilización" desde los cuadros militares.

Convertirse en oposición en un régimen democrático no es tarea fácil. Las contradicciones son enormes, la conflictualidad interna al movimiento también. Diversas corrientes no coincidían en la actitud frente a las propuestas estatales. La heterogeneidad interna y la fragmentación se hicieron claramente visibles.

Más allá de la cronología de los encuentros y desencuentros entre el movimiento de derechos humanos y el Estado, y de la crónica de las disputas internas, lo que vale la pena analizar es la relación entre el movimiento y la realidad institucional y política del país. En este sentido, uno de los efectos institucionales más importantes se ha producido en el papel de la justicia como poder autónomo en la Argentina. En la historia argentina, el Poder Judicial nunca tuvo una presencia política propia en relación a la sociedad. Tradicionalmente, las movilizaciones y protestas populares se dirigían a la sede del Ejecutivo (la Casa Rosada y la Plaza de Mayo) o al Congreso. De pronto, las movilizaciones populares de derechos humanos, hacia el final de la dictadura, comenzaron a expresar sus demandas frente al Palacio de Justicia. Por primera vez había demandas de la sociedad que se dirigían directamente, sin intermediación del Ejecutivo, hacia el Poder Judicial. A partir de la demanda social de justicia, y especialmente desde el desarrollo de los juicios a los comandantes de las Juntas Militares, el Poder Judicial comenzó a tener una presencia propia y novedosa en el plano político, que implicó su reubicación frente al Poder Ejecutivo. Es más, esta presencia fue poniendo en evidencia una actuación autónoma en relación al Ejecutivo, tanto en lo referente al tratamiento de la cuestión militar como en algunos casos civiles, referidos por ejemplo a las jubilaciones o a la definición de la drogadicción.

En este caso, estamos en presencia de indicios de transformación en el sistema institucional, aunque no se trata de un cambio en la normatividad legal. La división de poderes es parte de la Constitución Nacional, y no ha habido cambio alguno en este sentido. En las prácticas políticas, sin embargo, el movimiento de derechos humanos ha tenido efectos imprevistos en el accionar autónomo del Poder Judicial. Queda por ver, siguiendo el curso histórico de los acontecimientos futuros, si estos indicios de una presencia activa y autónoma del Poder Judicial se irá fortaleciendo y consolidando. También queda por investigar hasta qué punto los actores jurídicos —la Corte, los funcionarios— son conscientes de esta transformación en su ubicación socio-política y de sus posibles efectos. De hecho, con el cambio de régimen no hubo una renovación en el personal judicial ni en la filiación ideológica de la mayoría de los funcionarios. Debe recordarse que, a pesar de la oposición y protesta del movimiento de derechos humanos, la mayoría de los jueces del Proceso fueron confirmados en sus puestos por el Senado. Pero a pesar de las tendencias de conservación y reproducción de los sectores ideológicos más conservadores —o aun

reaccionarios— en el Poder Judicial, la implementación principista de las leyes parece constituir en sí misma una fuente de transformación de la posición de la justicia.

Otra área importante para el análisis es la relación entre el movimiento de derechos humanos y otros movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Sin duda alguna, ha habido una expansión de la temática de los derechos humanos a la sociedad como un todo, con las redefiniciones que estos procesos de expansión y apropiación suponen¹. En el cine y otras manifestaciones artísticas, en todas las organizaciones estudiantiles y en gran parte de las asociaciones profesionales, gremiales y los partidos políticos, los derechos humanos se han convertido en una temática presente y vigente. En las organizaciones proliferan las comisiones especiales de derechos humanos, aunque varía mucho la manera como el tema es definido: desde los organismos dedicados exclusivamente a la denuncia y al pedido de justicia en relación a violaciones sufridas por miembros de la organización, hasta la expansión de la noción de derechos humanos para incluir demandas de justicia social. Esta ampliación tiene el peligro, reconocido por líderes del movimiento de derechos humanos, de la pérdida de la especificidad de las demandas y su confusión con las reivindicaciones obreras, ciudadanas y populares en general.

La vinculación entre el movimiento de derechos humanos y el Estado, por un lado, y las organizaciones de la sociedad y la opinión pública, por el otro, llevan a indagar sobre el lugar y la función del movimiento en la sociedad argentina, tanto en el presente como en el futuro. No hay duda sobre su accionar en lo que tiene que ver con el reclamo de justicia por el pasado. Resulta también entendible la dinámica actual, que implica una cierta fragmentación y debate interno coincidentes con la expansión de su contenido temático a la sociedad como un todo y a la manera como el Estado está actuando en este campo. El desafío está en definir su rol hacia el futuro, su proyección histórica en la transformación de la sociedad argentina. En la elaboración de proyectos es donde podrá verse la vigencia histórica de largo plazo, quizás como movimiento defensor de la ética fundante del Estado democrático, la tolerancia y el pluralismo.

EL MOVIMIENTO OBRERO Y LA DEMOCRACIA

Los temas del movimiento obrero en la Argentina son siempre complejos. Actor socio-político significativo desde hace muchos años, la modalidad de la presencia del movimiento obrero ha ido cambiando con el tiempo. Más allá de esas funciones y estructuras específicamente ligadas a las relaciones laborales, el movimiento obrero ha actuado de manera múltiple. Por un lado, ha sido partícipe directo de la formulación y control de la política económica, en el Pacto Social de 1973 y en las negociaciones sobre concertación social actualmente en curso. Por el otro, ha cumplido una función política mucho más amplia que la que se desprende de la lectura de las leyes. En efecto, el sindicalismo ha sido parte —“columna vertebral”, al decir de algunos— del movimiento peronista, participando activamente y reflejando en su interior las peripecias, los logros y la conflictualidad del peronismo en las diversas coyunturas.

En la última década, se han producido una serie de transformaciones en el mercado de

¹ Esta expansión no supone que el esclarecimiento de los crímenes y los juicios y castigos a los militares involucrados constituyan en la actualidad una reivindicación privilegiada de la sociedad argentina en su conjunto. Por lo contrario, la observación del clima de opinión indica que lo que la mayor parte de la población quiere es encontrar alguna solución al pasado, aquella que asegure cierta calma política inmediata. No hay, en este sentido, un compromiso ético profundo con las demandas del movimiento de derechos humanos.

trabajo que afectaron profundamente la composición de los asalariados. La caída del empleo industrial y el aumento en el empleo por cuenta propia produjeron la decadencia del rol estratégico de ciertas capas de trabajadores que —como los obreros de las grandes plantas industriales, y los obreros y empleados de empresas públicas— habían constituido el eje central del desarrollo de la clase obrera desde la década del cincuenta. El efecto de estos cambios sobre la composición de los asalariados se traduce en un aumento de su heterogeneidad y atomización, que conspiran contra las posibilidades de organización y de acción colectiva. Estos cambios se manifestaron más agudamente durante el gobierno militar.

La crisis del régimen militar y el triunfo de Alfonsín en las elecciones de 1983 constituyeron dos elementos fundamentales en el terreno político, que permitieron el desarrollo de un movimiento de democratización sindical. Las movilizaciones por salarios, que se multiplicaron en la segunda mitad de 1982, constituyeron la ocasión para que en varios gremios los trabajadores desplazaran conducciones percibidas como aliadas al régimen militar: estas conducciones habían antepuesto su necesidad de perdurar en sus cargos a la expresión de las demandas de los trabajadores. En el período final del gobierno militar, la función más tradicional de los sindicatos, la reivindicación económica, se constituyó en terreno de confrontación política en lo referente a la relación entre dirigentes y base obrera.

Con el régimen democrático, nos encontramos con algo inédito: por primera vez el movimiento obrero acepta la legitimidad del Estado desde una ubicación en la oposición política. Durante los tres primeros años del gobierno de Alfonsín, sin embargo, su accionar respondió a una lógica de oposición frontal más que de búsqueda de concertación o compromiso. En efecto, a partir de 1983 se le abrieron al movimiento obrero diversos caminos. Podía optar por la negociación de conquistas transformadoras de las relaciones de trabajo dentro de los espacios abiertos por el Estado y por la vuelta a la legalidad constitucional (por ejemplo, en temas relacionados con la normalización de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, formas de participación en la gestión, etc.). También podía optar por una política de oposición al gobierno, especialmente en lo que hace a las demandas económico-salariales, pero también en los reclamos legales, con un énfasis en la demanda del retorno a las normas legales vigentes durante el gobierno peronista 1973-1976, sin propuestas o formulaciones alternativas novedosas.

La dinámica de la relación entre el movimiento obrero y el Estado está centrada, entonces, en propuestas estatales de negociación y de concertación, que terminan en fracasos, y en manifestaciones de oposición frontal. La expresión más visible de esta estrategia es el paro general. Se realizan nueve paros generales entre setiembre de 1984 y octubre de 1986, con considerable éxito en cuanto a la adhesión de las bases, pero infructuosos en cuanto al avance de la posición obrera frente al Estado.

La actuación directa del sindicalismo frente al Estado no es nueva. Se trata de una modalidad de acción que se fue desarrollando a partir de 1955. Desde esa época, el sindicalismo ha mantenido su identidad política peronista, pero ha actuado con autonomía y fuerza propia, siguiendo un accionar corporativo. Al mismo tiempo, ha mantenido una vinculación íntima, aunque siempre conflictiva y cambiante, con el partido y el movimiento peronista. En varios momentos, el sindicalismo logró combinar la representación gremial y política de los trabajadores, pero siempre en tanto dirigencia sindical y no partidaria. Podría decirse que esta modalidad, reacia a ubicarse en patrones de agregación partidaria, es parte de la cultura política argentina, aceptada por una amplia gama de sectores sociales y no sólo por la clase trabajadora.

Las dificultades en su ubicación dentro de los patrones de agregación partidaria de intereses provocan tensiones entre el movimiento sindical y el partido. En la transición a la democracia, momento en que ambos aceptan las reglas de juego de la democracia parlamentaria, estas tensiones se agudizan por la crisis que atraviesa el peronismo, pero *tiene como trasfondo los cambios en la composición de la clase obrera ligados a transformaciones estructurales y a la recesión económica.*

En esta situación, el sindicalismo logra representar a diversos sectores trabajadores cuya condición se ve afectada directamente por la política económica oficial, e inclusive ha logrado ampliar la gama de demandas, especialmente *haciéndose cargo de las reivindicaciones de los jubilados.* Pero no logra articular al conjunto de la clase trabajadora o de los sectores populares. Quedan fuera, por un lado, los sectores sindicales, que tienen fuerza suficiente para *negociar directamente con el Estado;* y, por otro, amplios sectores de desocupados y trabajadores del sector informal. La fragmentación y heterogeneidad de los sectores populares son enormes, y esto provoca una modalidad particular de acción de la CGT:

Puede ocupar el centro de la escena política por ausencia de oposiciones partidarias, pero no puede hacerlo sino mediante un modo de 'agregación' de intereses en el que éstos son *yuxtapuestos y no redefinidos,* suma que termina expresándose en demandas rígidamente no negociadas y que no pueden convertirse en una alternativa político-estatal de carácter global (Palermo, 1986, pp. 22).

Sin embargo, hay algunas indicaciones de transformación, por lo menos la toma de conciencia de algunos actores de la necesidad de replantear ciertos temas. En primer lugar, el proceso electoral en los sindicatos, durante 1984 y 1985, mostró algunas novedades en cuanto al grado de pluralismo y la presencia de nuevas modalidades de negociación y composición de las dirigencias. En segundo lugar, hay una ampliación en la vinculación entre el movimiento obrero y temáticas que recorren a la sociedad y a otros movimientos sociales. La compleja y contradictoria manera en que el movimiento sindical procesó el tema de los derechos humanos es una de esas áreas². La creación de ámbitos de discusión con la juventudes políticas en la CGT y la emergencia de la temática de la mujer en el mundo sindical (Gogna, 1986) son otras indicaciones de esto. La atención de los medios de comunicación, sin embargo, está centrada en los temas económicos. En tercer lugar, y esto es especialmente significativo, en algunos sectores del Partido Justicialista y del sindicalismo se plantea en la actualidad el debate sobre la relación entre *movimiento sindical y partido.* De este debate pueden eventualmente surgir propuestas alternativas, que no se formulen en términos del paradigma de cooptación/subordinación sino que puedan imaginar formas de articulación diferentes, sobre la base de la búsqueda de convergencias entre distintos sectores.

La relación entre el movimiento sindical y el gobierno de Alfonsín cobró una dinámica nueva cuando, a principios de 1987, fue designado como ministro de Trabajo un líder sindical, identificado con una de las corrientes internas dentro del movimiento obrero

² La CGT creó una subsecretaría de derechos humanos, en parte contrarrestar los efectos negativos que sobre la opinión pública tuvieron los incidentes frente al local de la CGT entre las Madres de Plaza de Mayo y los sindicalistas por un lado, y los testimonios de dos líderes sindicales en el juicio a las Juntas. En esa ocasión, Triacca y Baldasini, importantes líderes sindicales, testimoniaron "no recordar" las desapariciones de obreros y delegados fabriles durante la dictadura. En diversos sindicatos que han renovado autoridades se han ido creando comisiones de derechos humanos cuyo sentido es la elaboración de una "memoria local" respecto a lo que la represión implicó para la clase trabajadora.

peronista. Por lo menos en el plano de las manifestaciones explícitas, las autoridades de la CGT aceptaron esta designación y expresaron su intención de participar en los esfuerzos de concertación promovidos desde el Estado. La relación, sin embargo, no es sencilla, ya que los líderes obreros mantienen las reivindicaciones y el ministro de Trabajo comienza a actuar como intermediario entre los sectores obreros y la política económica elaborada desde el Ministerio de Economía.

LOS ACTORES BARRIALES

En alguna medida, los movimientos de barrios populares tienen rasgos opuestos a los movimientos de derechos humanos. El contenido de las demandas y reivindicaciones es, manifestamente, limitado y específico a las condiciones de vida: los ligados a la infraestructura urbana de cada barrio o área de la ciudad, difícilmente generalizables o traducibles a demandas con contenidos éticos profundos. Además, por lo menos en teoría, el contrincante puede no ser el Estado—inclusive puede no haber opositor, como en algunas organizaciones de auto-ayuda o cooperativas.

Las movilizaciones barriales, incluyendo la toma colectiva y organizada de terrenos de los últimos años en la Argentina, se dieron en el contexto de una larga historia de luchas y demandas en las áreas urbanas populares. En esa historia, la organización barrial clave fue la *Sociedad de Fomento*, agrupación de vecinos que tienen a su cargo la infraestructura colectiva, con patrones centrados sea en la solidaridad/cooperativismo/autoayuda o en la presión sobre los organismos de Estado, según el período histórico (del país y de cada barrio) y la coyuntura. El fomentismo, más o menos ligado a corrientes o partidos políticos, más o menos centralizado o disperso, forma ya parte de la tradición urbana de las grandes ciudades, especialmente de Buenos Aires.

Otro rasgo central de la historia urbana argentina es la limitada presencia estatal. Las necesidades habitacionales de los sectores populares han estado desde siempre en manos del núcleo familiar, que resuelve su problema de vivienda en el mercado inmobiliario. Los planes de vivienda estatales han sido muy escasos, cubriendo un porcentaje mínimo de la demanda. El Gran Buenos Aires es un inmenso espacio de "lotes propios" (comprados en interminables cuotas) con viviendas en permanente estado de autoconstrucción (Feijóo, 1983; Ujnovsky, 1978). El derecho a la "vivienda digna", aunque forma parte de más de una plataforma política, nunca llegó a transformarse en un derecho social reconocido. Existe una bien establecida tradición de acudir a redes de solidaridad familiar, de parentesco y de vecindario (Ramos, 1981), más que una tradición de protestas y reivindicaciones frente al Estado. Frente a este panorama histórico, los "vecinazos" y la invasión organizada de terrenos pueden ser vistos como experiencias realmente nuevas, que presentan formas de acción sin tradición en la historia urbana argentina.

Tradicionalmente, las invasiones de terrenos habían sido producto de acciones individuales-familiares de ocupación paulatina, a diferencia del estilo de invasiones organizadas colectivamente que se conocen en otros países de América Latina. Hacia fines de 1981, se dio un proceso de invasión de tierras y de organización vecinal novedoso en una zona del Gran Buenos Aires, San Francisco Solano. La invasión comenzó poco a poco, casi espontáneamente. El primer grupo de pobladores, con el espacio físico y político brindado por la parroquia católica de la zona, desarrolló en forma embrionaria lo que luego sería la *Comisión Vecinal*. Desde allí organizaron y dirigieron el resto de la invasión, que incluyó a 20.000 personas. Desde el comienzo, se evitó la urbanización irregular. La insistencia en construir barrios, sin hacinamiento, fijando el trazado de lotes y calles, se vincula con el intento de evitar la represión y con el deseo de minimizar conflictos entre

vecinos, pero también con la idea de la propiedad privada presente y valorada. Los ocupantes se autoidentificaban como víctimas de una situación de injusticia. Vivían esta como la única alternativa habitacional que les quedaba y eran unánimes en su disposición a legalizar la situación mediante el pago del lote ocupado.

En cierto sentido, esta invasión generó un espacio de lucha política en el que se confrontó la ilegalidad con la legitimidad. La legitimidad de los reclamos tuvo su soporte ideológico en el sentimiento compartido de ser sujetos de derechos socialmente sancionados, frente a la injusticia del régimen. La respuesta del régimen fue la represión, con un cerco policial que se mantuvo durante meses. Frente a la amenaza externa, el asentamiento creció en organización, pero además, buscó solidaridad y apoyo en organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones gremiales, etc. Nada fue suficiente; sólo la propia crisis de la dictadura permitió que la correlación de fuerzas variara lo suficiente como para obligar al Gobierno a levantar el cerco.

Con la crisis, se abrió el proceso de democratización y los partidos volvían a ocupar el centro de la escena política. La organización vecinal, que no sin dificultad decidió mantener su autonomía sin desaprovechar el espacio que las reglas del juego político otorgaban, enfrentó la recreada democracia con dos desafíos principales: el primero, la legalización de la ocupación, resuelto favorablemente con la expropiación de los terrenos por ley provincial. El segundo, sin duda de mayor trascendencia política, se refiere a la posibilidad de institucionalizar las formas de organización autogestionarias que los sectores populares se fueron dando para reclamar por sus derechos durante largos años de autoritarismo (Fara, 1985).

Los "vecinazos" fueron una experiencia diferente: una movilización popular en la primavera de 1982, desatada por una protesta en contra de una cuota adicional de impuestos municipales. En el lema "IMPUESTO SI, AUMENTO NO" se resumen los argumentos esgrimidos por las asociaciones vecinales. Los vecinos no pedían ser eximidos de la obligación de tributar, pero invocaban la falta de razonabilidad en el cobro y en el aumento de tributos que no se correspondían en absoluto con las crecientes carencias urbanas y de prestaciones sociales que padecían. Ligaban el conflicto por la cuota adicional con la crítica situación socio-económica que atravesaba el sector popular, y lo expresaban en la consigna: "NO PAGAR, NO PORQUE NO SE QUIERE SINO PORQUE NO SE PUEDE". También rechazaban la opción del gobierno de eximir del pago a familias de "probada indigencia", argumentando que eso equivalía a admitir un "certificado de pobreza" insultante para la población.

Desde las primeras protestas, de unos cientos de manifestantes, el movimiento fue creciendo hasta el "Lanuzazo", que convocó a más de 20.000 manifestantes. El conflicto no tenía perspectivas de solucionarse, ante la negativa del Gobierno a derogar la cuota y su respuesta represiva. Pero frente a la posibilidad de un plan de movilizaciones conjuntas de todo el Gran Buenos Aires, el Gobierno intentó reencauzar el conflicto. Por un lado, la Gobernación de la provincia convocó al fomentismo tradicional al diálogo y a la participación en un ente consultivo. Por otra parte, las entidades vecinales comprometieron a los partidos políticos a declarar una moratoria apenas asumieran las autoridades democráticas. La cuota -origen y reivindicación más explícita del movimiento vecinal- no fue derogada, pero tampoco abonada por la mayoría de los contribuyentes.

El movimiento vecinal protagonista de estas protestas estaba constituido, en su núcleo, por el fomentismo, pero también incluyó a otras instituciones de la vida local: juntas vecinales, centro de jubilados, de comerciantes, ateneos y bibliotecas populares, comisiones de amas de casa. También fue heterogénea la composición social, convocada a partir de la identidad de vecinos propietarios de viviendas populares en el Gran Buenos Aires.

Por último, el sentir anti-militar que se expresó en las protestas evidenció que, más allá de las autoridades locales, el destinatario final del repudio popular era la dictadura militar en su totalidad. Abierto impugnador de los proyectos de continuismo político, el movimiento vecinal se convirtió también en un activo portavoz de la demanda democrática de la sociedad argentina. Hacia fines del verano de 1983, la calma había retornado a los barrios y el país se entregaba de lleno a la campaña electoral (González, 1985).

A partir de esas movilizaciones, que se combinaron muy pronto con el tiempo de los partidos y la reaparición de la política, comenzó un proceso de revitalización de la política a nivel local, con una reconstrucción de espacio público en ese plano. Una vez instaurado el gobierno democrático, los actores en la escena local son múltiples: las autoridades municipales, los concejos deliberantes o vecinales, las asociaciones de la sociedad civil, los partidos políticos. Y las variaciones en las modalidades de la dinámica de las relaciones entre ellos son bastantes grandes.

La apertura democrática recreó el espacio para una variedad de formas de actuación pública y colectiva. En muchos ámbitos, es notorio como se retoman prácticas y modalidades de acción tradicionales, que responden a formas de relaciones sociales preexistentes. En el campo de lo local y de las municipalidades, lo observable a primera vista es la revitalización de prácticas clientelísticas y verticalistas de corte tradicional. Al mismo tiempo, también hay indicaciones de la heterogeneidad de procesos y de ciertas maneras nuevas de hacer política local. Estas se dan a partir de la revitalización de las sociedades de fomento y de la presencia de otras asociaciones de la sociedad civil en el plano local, organizaciones que estuvieron en la vanguardia del movimiento social hacia los finales de la dictadura.

La distinta dinámica depende en parte de la configuración de los partidos gobernantes en el nivel municipal, que muestran diversos grados y formas de autonomía en relación a las organizaciones de la sociedad. Debe señalarse que en los municipios del Gran Buenos Aires hay autoridades locales pertenecientes a los dos partidos políticos principales. Las transformaciones en gestación más novedosas son las que indican la emergencia de formas mixtas de resolución de problemas de consumo colectivo. Dada la profundidad de la crisis, que se manifiesta en la escasez de recursos municipales, se da la búsqueda de soluciones alternativas con la participación de las asociaciones locales y de las diversas corrientes de los partidos políticos. Esta participación y práctica de gestión de los aspectos colectivos de la cotidianidad es, sin duda, importante (González y Palermo, 1986).

En términos más generales, la realidad local está mostrando ensayos de participación de base. En algún sentido, la movilización de protesta callejera está acallada: no hay más las grandes acciones colectivas, con la excepción de una toma de tierras, en marzo de 1986, en La Matanza³. Desde la vida cotidiana de los barrios y villas populares, lo que se está evidenciando es una dualidad en la acción: por un lado, el partido; por el otro, el barrio. El partido político está allí, con una convocatoria limitada especialmente a los momentos electorales. Las elecciones de 1985, novedosas en la historia argentina, ya que no había elecciones parlamentarias o locales (no presidenciales) desde hacía veinte años, fueron en

³ Esta toma de tierras, apoyada por integrantes del Servicio de Paz y Justicia, involucró en un primer momento a cuatrocientas familias que se establecieron en terrenos fiscales de la zona, frente a la mirada pero no a la acción de fuerzas policiales. El conflicto social se fue manifestando cuando los vecinos de barrios populares cercanos protestaron por la invasión. Tanto las autoridades municipales como las organizaciones fomentistas tienen, en casos como éste, grandes dificultades en tomar partido por los más débiles, que quedan de alguna manera como 'los no representables'.

este sentido ejemplares: alta participación electoral, buen número de disputas intrapartidarias para la confección de listas de candidatos, muestras claras de aceptación social de los mecanismos electorales democráticos, manifestaciones todas de la vitalidad política en el nivel local —pero restringidas al período electoral—. El momento preelectoral de 1987 volvió a mostrar esta vitalidad de la política partidaria en el plano local.

Pero la vida cotidiana es, para los sectores populares, otra cosa. Es debatirse sobre qué le corresponde hacer al Estado y qué al individuo en la solución de los problemas de reproducción y consumo. La pregunta recurrente es, ¿qué cosas dependen de mí?. O alternativamente, ¿de quién es la responsabilidad de resolver las diversas cuestiones de la vida cotidiana? La falta de claridad en este punto, el mismo hecho de estar formulando la pregunta, son indicadores de la situación de crisis en la percepción de derechos de ciudadanía social y de la situación de transición, en el sentido de ser el actual un momento de reconstitución, o inclusive de reformulación de las identidades colectivas.

Este cuestionamiento de las responsabilidades y la búsqueda de soluciones a problemas a menudo urgentes o acuciantes da lugar a acciones reivindicativas, a los reclamos frente al Estado. Pero también, a veces, a ensayos de soluciones alternativas basadas en la solidaridad y la cooperación. El ejemplo del PAN (*Plan Alimentario Nacional*) es ilustrativo. Se trata de un programa estatal de emergencia, implementado por el gobierno democrático a comienzos de 1984, para la distribución de alimentos a familias carenciadas; en él se utiliza un mecanismo de distribución centralizado, con inocultables modalidades clientelísticas (González y Palermo, 1986, p. 10). Su aplicación generó disputas y protestas, especialmente con las autoridades municipales y provinciales de extracción peronista. Pero más allá de estas disputas entre autoridades, en el nivel barrial se encuentran ejemplos de prácticas de participación comunitaria (entre ellos, la cooperativa de consumo), emergentes no previstos de haber puesto en el espacio público local una actividad tradicionalmente tan familiar como lo es la alimentación.

Sin embargo, este espacio público local no es indiferenciado. En tanto está anclado en las necesidades familiares cotidianas —el agua, el pavimento, la escuela, el puesto de salud o de policía, o aun la vivienda o la alimentación— es un espacio público cercano, donde se mezclan el reclamo directo al Estado y algunas nuevas formas de participación colectiva. En esta dinámica, las cuestiones de la representación se alejan, y quedan en manos de los partidos y de “la política”.

LOS JOVENES, EL ROCK NACIONAL Y LA DEMOCRACIA

Los jóvenes han sido protagonistas importantes en la historia argentina, especialmente a través del movimiento estudiantil y de las juventudes de los partidos políticos. El movimiento estudiantil universitario tiene sus raíces en la reforma universitaria de 1918. Desde entonces, la historia del movimiento estudiantil ha sido parte indisoluble de la historia política del país. La universidad fue siguiendo los avatares de los complejos e inestables procesos políticos nacionales, de tal modo que resulta difícil descubrir en su desarrollo la presencia de focos que reflejen sea “nuevas formas de hacer política” o un cuestionamiento y replanteo de las relaciones sociales. Durante la reciente dictadura militar, además, la represión afectó de manera extrema a las universidades, provocando un congelamiento y desmovilización sin precedentes. Resulta fácil de entender, entonces, que el movimiento estudiantil estuviera ausente, en silencio. Sólo comenzó a reaparecer y a reorganizarse (siguiendo las líneas político-partidarias vigentes en este momento en el país) a partir del proceso de normalización de las universidades nacionales.

Por su parte, los partidos políticos argentinos han apelado desde siempre a los jóvenes. Como votantes, como activistas entusiastas, como cuadros, los jóvenes han estado presentes en las organizaciones políticas, aunque escasamente en las posiciones dirigentes. La expansión del movimiento político juvenil durante la década del sesenta fue parte del proceso de cambio en el papel de la juventud, tanto a nivel internacional como en el plano nacional. En la Argentina, fue la época del Cordobazo, el comienzo de la lucha armada, los primeros conjuntos de rock nacional (así como la expansión del consumo de blue jeans), todos ellos signos de la emergencia cultural y política de la juventud como sujeto activo y como destinatario de mensajes especialmente dirigidos a ella.

Después de este auge de la movilización, que duró hasta entrada de la década del setenta, la historia reciente de las juventudes políticas fue paralela a la del movimiento estudiantil. La más dura represión primero; la movilización de las juventudes de partidos como parte de la activación en la transición a la democracia, más recientemente.

¿Qué pasó con los jóvenes durante la dictadura, cuando ni el movimiento estudiantil ni los partidos pudieron canalizar su activismo? ¿Se refugiaron en el individualismo del mercado que proponía el régimen, o lograron alguna vía de expresión más colectiva? Recordemos que la represión y la muerte fueron fenómenos que atacaron de manera violenta y directa fundamentalmente a los jóvenes. La mayoría de los desaparecidos fueron jóvenes. El ser joven se convirtió en una señal de peligro para el régimen, poniendo a la persona en el papel de sospechoso. A pesar de esta situación y del miedo que indudablemente se generaba, hubo un campo en el que se manifestó el espíritu juvenil: fue en la música, en el llamado "rock nacional" (Vila, 1985).

El éxito del rock nacional se manifestó en la masiva asistencia a recitales (que llegaron a contar con 60.000 personas), en la proliferación de revistas dirigidas a la juventud y, en el plano más microsocial, en los grupos de amigos cuya actividad principal era escuchar música. Pero la música no era sólo eso: era una vía para reconocerse y solidarizarse con el otro, en un proceso de construcción de una identidad colectiva y un "sentido de la vida"; era un canal de expresión de oposición al régimen (el "*se va a acabar...*" en los recitales, la represión y presencia policial); era también —por lo menos para importantes sectores— un proceso de construcción ideológico-simbólico de valores nuevos, modelos de conducta (paz, amor, justicia, solidaridad, etc.). Era un movimiento cultural que no tenía, ni pretendía tener, impacto o efecto directo en el plano político, pero llegó a tener una fuerte presencia contestataria. Lo que detectamos como una fuerza democratizante (y no todo el movimiento lo tiene; recordemos la heterogeneidad de las propuestas y la presencia de los "heavy") está en la referencia a las relaciones sociales cotidianas, más que a los grandes acontecimientos políticos nacionales.

A partir de 1985, ya no se ven más las multitudinarias movilizaciones de la campaña electoral, ni tampoco la enorme presencia juvenil en las marchas por los derechos humanos. La participación política estudiantil ha bajado enormemente respecto a los niveles del período de transición; incluso el rock nacional pasa por un inocultable período de crisis. ¿Dónde está el retraimiento? ¿Cómo interpretarlo?

En lo que hace al movimiento estudiantil (tanto secundario como universitario), distintas políticas gubernamentales fueron atendiendo algunos reclamos y demandas de larga data: la modificación del sistema de evaluación, el ingreso irrestricto, la erradicación de distintas formas de autoritarismo en las aulas. Y esto pudo haber influido a la hora de encontrar banderas "fuertes" para proponer y organizar formas de participación. La participación en las elecciones estudiantiles ha bajado, el vuelco a la derecha del estudiantado es notorio. Si no en el liderazgo estudiantil, la indicación de un retraimiento y privatización parece clara.

Con respecto a las juventudes políticas, uno de sus más fuertes componentes, la juventud radical, se ha ido convirtiendo en juventud "oficial", alejándose de sus propuestas iniciales al compás de las redefiniciones políticas del gobierno estatal. El otro componente fuerte del movimiento, la juventud peronista, además de luchar por su propia legitimación dentro del partido, aparece dividida en las distintas vertientes en que se está fraccionando el peronismo. En este marco, las posibilidades de rehabilitación del MOJUPO (*Movimiento de Juventudes Políticas*) parecen escasas.

El movimiento de derechos humanos, y con él su pilar juvenil, está atravesando un período de debate interno y redefiniciones que aparece, a la faz pública, como una ausencia de los lugares otrora ocupados: básicamente, la calle y las movilizaciones del final de la dictadura militar.

¿Y el rock nacional? También está pasando por un período de transición y desmovilización: ausencia de recitales masivos, cierre de productoras de espectáculos del género, ausencia de liderazgos claros. Muchos de los contenidos del movimiento de rock son hoy en día patrimonio de amplios sectores de la sociedad: ciertas palabras de origen rockero están incorporadas al vocabulario cotidiano, la música de rock ha expandido su influencia sobre el folklore, el tango y la música melódica. Pero también es cierto que sus contenidos más profundos, tales como la propuesta de un estilo de vida menos ligado a los consumos y más a las vivencias interiores, o de relaciones interpersonales basadas en el reconocimiento de las diferencias y el amor, no se han plasmado. En este marco, el movimiento aparece fragmentado en diversas opciones: transformarse en grupos de acción voluntaria (los grupos de *Buenas Ondas* propuesto por Piero, que construyeron escuelas en zonas carenciadas); tratar de pasarla lo mejor posible después de años de represión y frustraciones (los conjuntos "*divertistas*" que se mofan del FMI y la deuda externa, *Las viudas e Hijas de Roque Enroll*, los *Twist*, etc.); comprometerse estrechamente con las organizaciones de derechos humanos (por ejemplo, Fito Páez aportando la canción para la campaña de las *Madres de Plaza de Mayo* u otros actuando en funciones políticas).

Sin embargo, la presencia del rock nacional en el escenario político-social es clara. Tal vez un ejemplo sirva para ilustrarlo. Durante el áspero debate acerca del divorcio, el rock nacional entró en ambos lados. En las jornadas contra el divorcio se estableció un panel especial que trató el tema "*La influencia satánica del rock*". Por otro lado, cuando el 20 de agosto de 1986 el presidente de la Cámara de Diputados cerró el debate parlamentario sobre la ley de divorcio y felicitó a los diputados por su aprobación, lo hizo con otra cita del rock nacional: "*Sólo le pido a Dios que no me haga indiferente al amor de la gente*".

LAS MUJERES

En las décadas del setenta y el ochenta, el clima internacional fue la creación y desarrollo de la temática de la subordinación de la mujer, acompañado por la irrupción significativa de los movimientos de mujeres en la escena pública. A nivel nacional, el retraso es enorme. Las mujeres de los sectores populares fueron víctimas dobles del proceso económico y político desatado por la dictadura. En efecto, además de las medidas generales, el gobierno tomó medidas que afectaron de manera específica a las mujeres, como la anulación de la legislación protectora y la ofensiva ideológica de refuerzo de la autoridad en la familia y valoración de la vida privada.

¿Cuál fue la reacción de las mujeres frente a esta situación? Sin duda la respuesta más novedosa desde las mujeres fue la presencia de las Madres en el lugar físico de la política: la Plaza de Mayo. Irónicamente, la idea de que los niños son tema de mujeres tenía aquí

una salida insensada. La aparición y posterior consolidación de las Madres y de las Abuelas constituye una importante mutación en el mapa político nacional. Insultadas por la prensa, incomprendidas por muchos sectores, reprimidas por el terror estatal, respetadas en silencio y con temor por otros, las Madres de Plaza de Mayo se fueron convirtiendo en el símbolo más claro de que la oposición a la dictadura no sólo era posible, sino que era además una cuestión *ética*.

Desde la guerra de las Malvinas, las movilizaciones de las mujeres se multiplicaron: las mujeres se rebelan contra el servicio militar obligatorio; las feministas se lanzan a una importante campaña para lograr la patria potestad compartida, abriéndose paulatinamente al tema del divorcio, los derechos reproductivos de las mujeres, la demanda de educación sexual y la igualdad jurídica de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. También aparecen las primeras protestas de grupos de amas de casa —unos nacidos durante la dictadura, otros reaparecidos de su latencia— que empiezan a rebelarse contra el alza del costo de vida, ensayando novedosas estrategias de resistencia (Feijóo y Gogna, 1987).

A pesar de la diversidad de objetivos, de la variedad de los orígenes, de la heterogeneidad de las participantes, estos movimientos y acciones colectivas comparten ciertas características. A partir de los roles más tradicionales, las mujeres se movilizan públicamente, con demandas dirigidas al Estado, con protestas que cuestionan el orden vigente y con propuestas de transformación de los patrones de relaciones sociales y políticas. Son casos donde lo privado y lo personal se transforman en el eje de actuaciones y enfrentamientos públicos, no por una elaboración ideológica abstracta, sino a partir de los afectos y del cuidado que las mujeres están llamadas por tradición a ofrecer a otros.

La represión de la dictadura, al golpear con tanta fuerza la organización de la cotidianidad y al intentar replantear los parámetros ideológicos y prácticos de la distinción entre lo privado y lo público, provocó la desubicación social de las mujeres, una crisis en las formas y contenidos de su cotidianidad. Estas, aunque en apariencias sólo buscaban reestablecer un equilibrio, estaban plantando las semillas de profundas transformaciones que se manifiestan en tendencias democratizantes, en una reversión de las prioridades en la política, en principios éticos no negociables. Aunque parten de la cotidianidad, estas acciones de hecho destruyen lo conocido y lo esperado. La realización de esta potencialidad queda, por supuesto, para el futuro.

Con la reemergencia de la política y la transición a la democracia, llama la atención la ausencia pública de las mujeres. Hay algunas experiencias de acción de las mujeres sindicalistas, algún programa promovido por el Estado que lucha por atraer la participación de mujeres de base, pequeños grupos feministas que mantienen vivas las reivindicaciones, pero de hecho las mujeres no están presentes en el escenario público. Algunos temas promovidos por las mujeres fueron retomados por otros actores —el más notorio es la propuesta de legislación sobre divorcio—, pero en realidad podría decirse que la dinámica política actual, tanto en los movimientos sociales y los partidos como en los aparatos del Estado, transcurre sin la presencia de las mujeres como sujeto, ni de las cuestiones de género como tema significativo.

A MODO DE CONCLUSION

La historia de los sectores populares urbanos en la Argentina estuvo marcada por la inmigración, asociada —en el plano de las expectativas de la conformación de la cultura de la cotidianidad popular— con el tema del progreso y el ascenso social. Se vivía en función de un proyecto individual-familiar de movilidad social, y estos proyectos individuales tenían una base en las oportunidades que el país ofrecía.

Sobre esta matriz cultural, el peronismo de la década del cuarenta vino a consolidar identidades y pertenencias. El reconocimiento de la ciudadanía social de los sectores populares, su inclusión como sujetos de derecho, se lograron en gran medida a través de la ampliación de las oportunidades para el bienestar. Este período fue también el de la expansión de los bienes de consumo masivo, así como de los servicios de consumo colectivo, identificados como derechos (lugares de vacaciones para la clase obrera, hospitales públicos, parques y plazas para la niñez y la ancianidad). La identidad peronista significó, para los sectores populares, su incorporación como ciudadanos con dignidad. En parte, este reconocimiento implicó dar respuesta a demandas sociales preexistentes, demandas ancladas en las relaciones laborales, en los servicios y en el consumo.

La coyuntura actual es de crisis. Para la cotidianidad de los sectores populares es una crisis doble: la identidad política colectiva, ligada a la crisis del movimiento peronista; pero también crisis de su proyecto individual-familiar. El temor a la caída, a la movilidad descendente, es poderoso. Los proyectos familiares se ven frustrados. De ahí la desesperanza, la desilusión. Y esto se da en un contexto cultural en el cual la política no ofrece canales. Si antes se votaba al peronismo por sentir la coincidencia entre proyecto familiar y oportunidades ofrecidas desde el Estado y la política, ahora el proyecto es visto como un deseo imposible de ser realizado.

Ninguna alternativa política parece ofrecer certezas de poder cambiar el futuro familiar. El peronismo en crisis, incluyendo la dimensión de las identidades colectivas de "los peronistas", sin Perón y sin maneras de encontrar banderas de unidad. El radicalismo que, aunque muchos lo votaron, nunca se hizo cargo de los temas de la justicia social y de las oportunidades de ascenso de los sectores populares.

Entonces, la política es visualizada como lejana, como campo de acción de otros sujetos. Aun entre activistas y en el ámbito de locales partidarios en barrios populares, lo que se escucha es un discurso que subraya la distancia enorme entre Estado y política, por un lado, y destino personal y vida cotidiana, por el otro. En este contexto, sin embargo, las salidas solidarias y colectivas aparecen ligadas a problemas concretos, del barrio y de la cotidianidad, para ser resueltas en parte por organizaciones "propias", más que por las visualizadas como propiamente políticas.

He aquí, entonces, la urgencia de comprensión del significado de las acciones colectivas y de los movimientos sociales. De ahí, también, el desafío histórico que se presenta en este momento de transición a la democracia. Es a través de ellos que se hace necesario establecer las mediaciones entre la cultura de la cotidianidad y las formas de articulación y representación institucionalizadas en la política y en el Estado. De ahí la urgencia de promover, desde el Estado democrático, la creación y consolidación de espacios de participación popular.

EPILOGO

Los acontecimientos de abril y mayo de 1987 son conocidos: un levantamiento militar que reclama un verdadero "punto final", no más juicios, no más condenas. Con tratativas entre el Ejecutivo y los militares, el Parlamento aprueba una ley de "obediencia debida" que, para todos los fines prácticos, parece satisfacer las demandas militares. Algunos dirán que no había otra salida, que la presión militar era demasiado fuerte. Otros, que el Gobierno cedió demasiado. Es evidente que el sistema político como un todo requiere refuerzos democráticos. Es evidente también que la movilización popular de apoyo durante el conflicto de Semana Santa mostró con claridad la existencia de un potencial de

apoyo, de un recurso de poder, que no había sido llamado a jugar hasta entonces su papel. El desafío que se plantea ahora es cómo integrar esta participación popular no como recurso en momentos de crisis, sino de una manera orgánica, en un proyecto democrático participativo.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Fara, Luis, 1985. "Luchas reivindicativas urbanas en su contexto autoritario. Los asentamientos de San Francisco Solano". En Jelin (comp.), 1985, Vol. 2.

Feijóo, María del Carmen y Mónica Gogna, 1987. "Las mujeres en la transición a la democracia". En Jelin (comp.), 1987.

Gogna, Mónica, 1986. "Las mujeres en los sindicatos". Buenos Aires: Mimeo.

González, M. Inés, 1985. "Protestan los barrios (el murmullo de la política)". En Jelin (comp.), 1985, Vol. 2.

González, M. Inés y Vicente Palermo, 1986. "La política local". Mimeo.

Jelin, Elizabeth (comp.), 1985. *Los nuevos movimientos sociales*. 2 vol. Buenos Aires: CEAL.

Jelin, Elizabeth (comp.), 1987. *Ciudadanía e identidad. Las mujeres en los movimientos sociales en América Latina*. Ginebra: UNRISD.

Palermo, Vicente, 1986. "Movimientos sociales y partidos políticos: aspectos de la cuestión en la democracia emergente en la Argentina". Mimeo.

Sondereguer, María, 1985. "El movimiento de derechos humanos en Argentina". En Jelin (comp.), 1985, Vol. 2.

Vila, Pablo, 1985. "Rock nacional: crónicas de la resistencia juvenil". En Jelin (comp.), 1985, Vol. 1.